CAPÍTULO III.

DE LA DIGNIDAD Y DE LA IGUALDAD DE LAS NACIONES, TÍTULOS Y OTROS DISTINTIVOS DE HONOR.

§. xxxv. Cualquiera nación, ó estado soberano é independiente, merece consideración y respeto, porque figura inmediatamente en la gran sociedad del género humano, porque es independiente de todo poder sobre la tierra, y porque es una reunión de infinitos hombres más distinguida sin duda que ningún individuo. El soberano representa á la nación entera y reúne en su persona toda la magestad de ella. Ningun particular aunque fuese libre é independiente puede compararse á un soberano, porque sería quererse igualar él solo á una multitud de sus iguales. Por consiguiente, las naciones y los soberanos tienen á un mismo tiempo la obligación y el derecho de sostener y hacer respetar su dignidad, como una cosa importante para su seguridad y tranquilidad.

§. xxxvi. Ya hemos observado (prelim. §. xviii) que ha establecido la naturaleza una perfecta igualdad de derechos entre las naciones independientes. Por consiguiente, ninguna de ellas puede naturalmente pretender prero-
gativas; porque todo lo que la calidad de nación libre y soberana concede á una, se lo concede también á otra.

§. xxxvii. Y puesto que la preferencia ó primacía de dignidad es una prerrogativa, ninguno soberano puede atribuirla naturalmente y de derecho. ¿Por qué las naciones que no dependen de él, le han de ceder ninguna cosa á pesar suyo? Sin embargo, como un estado extenso y poderoso es mucho más considerable en la sociedad universal que uno pequeño, es razonable que éste ceda en las ocasiones en que es preciso que uno de los dos lo haga, como en un congreso, y le manifieste algunas deferencias de puro ceremonial que no perjudiquen la esencia de la igualdad, y solo denoten una prioridad de orden, ó el primer lugar entre sus iguales. Las demás atribuirán naturalmente este primer lugar al más poderoso; y sería inútil y ridículo que el más débil quisiese obstinarse. La antigüedad del estado merece también consideración en estas concurrencias, pues el más moderno no puede desposeer á ninguno de los honores que disfruta, y necesita razones muy poderosas para merecer la preferencia.

§. xxxviii. La forma del gobierno es por su naturaleza agena de esta cuestión. La dignidad y la magestad residen originariamente en el cuerpo del estado, y la del soberano depende de que representa á su nación. ¿Tendrá el es-
rado mas ó menos dignidad si le gobierna uno solo, ó muchos individuos? Los reyes se han apropiado una superioridad de clases sobre las repúblicas; pero esta pretension no tiene otro apoyo que la superioridad de sus fuerzas. Antiguamente la república romana miraba á todos los reyes como muy inferiores á ella. Los monarcas de Europa solo han encontrado repúblicas débiles y han desdeñado reconocerlas como iguales; y aunque las de Venecia y de las Provincias-Unidas, han conseguido los honores de las testas coronadas, sus embajadores ceden la preferencia á los de los reyes.

§. xxxix. En consecuencia de lo que acabamos de establecer, si la forma del gobierno se muda en una nacion, no por eso dejará de conservar la dignidad y los honores que posee. Cuando la Inglaterra destronó sus reyes, Cromwel no permitió que se rebajasen en nada los honores que se hacían á la corona ó á la nacion; y supo mantener en todas partes á los embajadores ingleses en la clase que habían ocupado siempre.

§. xl. Si los tratados ó un uso constante, fundado en el consentimiento tácito, han señalado las clases, es forzoso conformarse á ellos. Disputar á un príncipe la dignidad que ha adquirido por este medio, será hacerle injuria, porque se le manifiesta menosprecio, ó violar los pactos que le aseguran el derecho. Por eso habiendo las reparticiones intempestivas de la
casa de Carlo Magno dado el imperio al primogénito y el reino de Francia al segundo, le cedió la preferencia tanto mas fácilmente, porque todavía se conservaba en aquel tiempo una idea reciente de la magestad del verdadero imperio romano. Sus sucesores signieron lo que hallaron establecido, los imitaron los demás reyes de Europa, y de este modo se halló la corona imperial sin contradicción ninguna en posesion de la primera dignidad entre los cristianos. La mayor parte de la demás coronas no estan de acuerdo en este punto.

Algunos quisieron que se mirase la preferencia del emperador como mas superior al primer lugar entre sus iguales, atribuirle una preeminencia sobre los demás reyes, y en una palabra, hacerle un gese temporal de la cristianidad (1); y en efecto parece que muchos emperadores tuvieron en su ánimo algunas pretensiones semejantes, como si, resucitando el nombre del imperio romano, hubieran podido resucitar al mismo tiempo sus derechos. Los demás estados han tomado precauciones contra semejante pretension. Pueden verse en Mezeray (2) las precauciones que tomó el rey Cárlos V,

(1) Bartolo ha llegado a decir que son herejes todos los que no creen que el emperador es señor de todo el mundo. Véase Bodin, de la República, lib. i., cap. ix', p. 139.

(2) Historia de Francia, explicacion de las medallas de Cárlos V.
LIBRO SEG., CAP. III.

41
cuando el emperador Cárlos IV fué á Francia, temiendo, dice el historiador, que este príncipe y su hijo el rey de Romanos fundasen algún derecho de superioridad sobre su cortesia. Bodin refiere (1) que pareció muy mal en Francia, que el emperador Segismundo hubiese tomado asiento en parage real, y que hubiera hecho caballero al senescal Beauncaire, añadiendo que, para cubrir la falta notable que habían cometido en sufrirlo, no quisieron permitir que, hallándose en Léon el mismo emperador, hiciese duque al conde de Saboya. Ahora creería el rey de Francia sin duda comprometerse si manifestase solamente la menor idea de que pudiese otro apropiarse alguna autoridad sobre su reino (2).

§. xvi. Pudiendo la nación conceder á su jefe el grado de autoridad y los derechos que juzgue á propósito, tiene igual libertad con respecto á nombre, á los títulos y á todos los

(1) De la Repúb., p. 138.

(2) Pentherriáedor, plenipotenciario del emperador en el Congreso de Cambray, hizo una tentativa para asegurar á su amo una superioridad y preeminencia incontestable sobre las demás coronadas. Obligó al conde de Provana, ministro del rey de Cerdeña, á firmar una acta en que declaraba que ni su amo ni otro ningún príncipe podía disputar la preeminencia al emperador. Habiéndose hecho público este escrito, se quejaron los reyes con tanta energía que fue llamado Provana, y el emperador mandó á su plenipotenciario que suprimiese aquel escrito, fingiendo por otra parte que ignoraba lo que había pasado; y se desgravó este negocio. Mem. del M. de San Felipe, tom. 4, p. 191.
honores con que quiera condecorarle. Pero conviene á su prudencia y al interés de su reputación no separarse demasiado en este punto de los usos adoptados generalmente en los pueblos civilizados: observemos también que en esto debe dirigir la prudencia, y obligarla á proporcionar los títulos y honores al poder de su jefe y á la autoridad con que quiere vestirle. Es verdad que los títulos y los honores nada deciden, porque son nombres y ceremonias vanas cuando están mal colocados; pero nadie ignora lo que influyen en las ideas de los hombres. Por consiguiente, este es un negocio más grave de lo que parece á primera vista. La nación debe cuidar de no humillarse á sí misma en presencia de los demás pueblos, ni en vísperas de su jefe con un título demasiado humilde; debe cuidar más todavía de no engreírse con un nombre vano, con honores desmedidos, ni hacerle concebir la idea de arrogarse sobre ella un poder que la pertenece, ó adquirir con injustas conquistas un dominio correspondiente. Por otra parte, un título elevado puede obligar al jefe á sostener con más energía la dignidad de la nación. Las circunstancias determinan la prudencia, y esta conserva en todas las cosas una justa medida. "La dignidad real: dice un "autor respetable á quien puede creerse en "esta materia, sacó á la casa de Brandenburg "del yugo de servidumbre en que la casa de
Austria tenía entonces á todos los príncipes de Alemania. Este era un incentivo que Federico 1º dejaba á toda su posteridad, y con el cual parece que la decía: te he adquirido un título, hazte digna de él; he establecido los fundamentos de tu grandeza, á tí te toca consumar la obra» (1).

§. xlii. Si el gese del estado es soberano, posee los derechos y la autoridad de la sociedad política, y por consiguiente puede dictar él mismo su título y los honores que se le han de rendir, siempre que no los haya determinado la ley fundamental, ó que las limitaciones de su poder no se opongan claramente á los que quiera atribuirse: sus súbditos estan obligados á obedecerle en esto, como en todo lo que ordena en virtud de una autoridad legítima. Por esta razón el Czar Pedro 1º, fundado en la vana extensión de sus estados, se decretó el mismo el título de emperador.

§. xliii. Pero las naciones extrangeras no estan obligadas á condescender con la voluntad del soberano que toma un título nuevo, ó del pueblo que titula á su gese con el nombre que tiene por conveniente (2).

(1) Memorias para servir á la historia de Brandemburg.
§. xliiv. Sin embargo, si este título es en todo racional y conforme a los usos recibidos, conviene absolutamente a los deberes naturales que unen a las naciones, que den al soberano, ó jefe de un estado, el mismo título que le da su pueblo. Pero si este título es contra el uso, ó designa algunas cosas que no posee el que le afecta, los extranjeros pueden negarsele, sin que tenga razón para quejarse. El título de magestads está consagrado por el uso a los monarcas que mandan grandes naciones. Los emperadores de Alemania pretendieron reservárselo durante mucho tiempo, como perteneciente únicamente a su corona imperial; pero los reyes defendieron con razón que no había cosa alguna sobre la tierra más eminente y augusta que su dignidad; negaron la magestads al que se la negaba (1), y en el día, fuera de algunas exenciones fundadas en razones particulares, el título de magestads es un atributo propio de la calidad de rey.

amicus. La corte de Francia se ofendió infinito de este formulario, y el embajador Boreel en una carta al pensionario de Wit, de 25 de mayo de 1655, dice que no se había presentado aquella carta de Cromweel, y que la habían guardado los que estaban encargados de ella, temiendo que produjese alguna desavenencia.

(1) En tiempo del famoso tratado de Wesfalia los plenipotenciarios de Francia convinieron con los del emperador, en que, el rey y la reina cuando le escribiesen de su propio puño y le diesen magestads, los responderia tambien de su mano y con el mismo título. Carta de los plenipotenciarios á M. de Brienne, 15 de octubre de 1646.
Como sería ridículo a un príncipe pequeño tomar al título de rey y hacer que le diesen mages-tdad, las naciones extranjeras, negándose estas á su capricho, procederán conforme á la razón y á sus deberes. Sin embargo, si hubiese en alguna parte un soberano que, á pesar de la poca extensión de su poder, se hallase en pose- sión de recibir de sus vecinos el título de rey, las naciones lejanas que quieren comerciar con él no se le pueden negar, porque no las per- nece á ellas reformar los usos de aquellas re- giones remotas.

§. xlvi. El soberano que quiere recibir con- stantemente ciertos títulos y honores de parte de las demas potencias, debe asegurarlos por medio de los tratados, y las que se han com- prometido por este medio, se hallan desde en- tonces obligadas con él, y no pueden apartarse del tratado sin hacerle injuria. Así en los ejem- plos que hemos referido hace poco del Czar y del rey de Prusia, cuidaron de negociar antici- padamente con las cortes amigas, para asegu- rarse de que los reconoerían en la nueva ca- lidad que deseaban adquirir.

Antiguamente defendían los papas que per- tenecía únicamente á la tiara crear nuevas cor-onas; y confiados en la supersticion de los prín- cipes y de los pueblos, se atrevieron á preten- der una prerogativa tan sublime, que se eclipsó
§. xlv. A falta de tratados deben conformarse, en cuanto á los títulos y en general á todas las distinciones de honor, á lo que haya establecido el uso generalmente recibido. Que se separar de él con respecto á una nación, ó á un soberano, cuando no hay ninguna razón particular para ello, es manifestarla menosprecio ó mala voluntad, cuya conducta es contraria igualmente á la sana política y á lo que se deben las naciones unas á otras.

§. xlvii. El mayor monarca debe respetar en cualquier soberano el eminente carácter de que se halla revestido; porque la independencia, la igualdad de las naciones, y los deberes recíprocos de la humanidad, convidan á manifestar al gese, aunque sea de un pueblo pequeño, los respetos que se deben á su calidad. El estado mas débil se compone de hombres lo mismo que el mas poderoso, y nuestros de-

(1) Los príncipes católicos recibían del papa algunos títulos que tienen conexión con la religión. Benedicto XIV concedió el de fidelismo al rey de Portugal; y tuvo á bien no reparar en el estilo imperativo, en que está concebida aquella bula, cuya fecha es de 25 de diciembre de 1748.
LIBRO SEG., CAP. III.

Herbes son iguales para con todos aquellos que no dependen de nosotros.

Pero este precepto de la ley natural no se extiende más de lo que es esencial á los respetos que se deben unas á otras las naciones independentes; en una palabra, más de aquello en que se demuestra que se reconoce un estado, ó un soberano, para ser verdaderamente independiente y soberano, digno por consiguiente de todo lo que merece esta calidad. Por lo demás siendo un gran monarca, como hemos ya observado, un personaje muy importante en la sociedad humana, es natural que en todo lo que es puro ceremonial, y sin ofender en ninguna manera la igualdad de los derechos de las naciones, se le rindan los honores á que no puede aspirar un pequeño príncipe, el cual no debe negar al monarca todas las deferencias que no perjudiquen su independencia y soberanía.

§. XLVIII. Todas las naciones ó soberanos deben conservar su dignidad (§. XXXV), haciendo que les tributen los homenages que merecen, y principalmente no sufriendo que se los menoscaben. Por consiguiente, si le pertenecen algunos títulos y honores, según el uso constante, puede exigirlos, y debe hacerlo en las ocasiones en que se halle comprometida su gloria.

Pero es necesario distinguir bien entre la
negligencia ó la omisión de lo que debía hacerse, según el uso comúnmente recibido, y los actos positivos opuestos al respeto y á la consideración, ó los insultos. Pueden quejarse de la negligencia, y si no la reparan considerarla como una señal de malas disposiciones; y tienen derecho para exigir, aun por la fuerza de las armas, la satisfacción de un insulto. El Czar Pedro I° en su manifiesto contra la Suecia se quejó de que no le habían hecho la salva al pasar por Riga, y podía extrañar y quejarse de que no le hubiesen hecho aquellos honores; pero tomarlo por un pretexto de guerra, sería prodigar excesivamente la sangre humana.

CAPÍTULO IV.

DEL DERECHO DE SEGURIDAD, DE LOS EFECTOS DE LA SOBERANÍA Y DE LA INDEPENDENCIA DE LAS NACIONES.

§. xl. En vano prescribe la naturaleza á las naciones y á los particulares el cuidado de conservarse, y de adelantar su propia perfección y la de su estado, si no les concede el derecho de evitar todo lo que pueda inutilizar este cuidado. El derecho no es otra cosa que la facultad moral de obrar; esto es, hacer lo que es moralmente posible, bueno y conforme á nuestros deberes; y por consiguiente tenemos
generalmente el derecho de hacer todo lo que es necesario para cumplir nuestros deberes. Todas las naciones y todos los hombres tienen pues derecho para no sufrir que ninguna otra perjudique á su conservación, su perfección y la de su estado; es decir, de librarse de cualquiera lesión (§. xviii); y este derecho es perfecto, puesto que se les ha concedido para satisfacer una obligación natural é indispensable. Cuando no podemos usar de la fuerza para hacer respetar nuestro derecho, su efecto es muy incierto. Este derecho de libertarse de toda lesión, se llama derecho de seguridad.

§. L. Cuando se puede, lo más seguro es prevenir el mal. Una nación tiene derecho de resistir al mal que quieren hacerla, de oponer la fuerza, y cualquier medio racional, á la que obra actualmente contra ella; y aun á anticiparse á las asechanzas, cuidando sin embargo de no atacar por sospechas vagas é inciertas, para no exponerse á llegar á ser ella misma un agresor injusto.

§. LI. Cuando se ha hecho el mal, el derecho mismo de seguridad autoriza al ofendido á solicitar una satisfacción completa, y á emplear para ella la fuerza si fuere necesario.

§. LII. Finalmente tiene derecho el ofendido para proveer á su seguridad en lo sucesivo, para castigar al ofensor (1), imponiéndole una

(1) Véase la nota del §. 7 de este libro. D.
pena capaz de apartarle en adelante de semejantes atentados, y para intimidar á los que intentasen imitarle. También puede, según la necesidad, ponerle en la imposibilidad de dañar. Usa de su derecho en todas estas medidas que toma con razón; y si resulta de ellas algun daño al que le ha puesto en la necesidad de obrar así, este solo puede quejarse de su propia injusticia.

§. 133. Por consiguiente, si hubiese en alguna parte una nación inquieta y maligna, siempre dispuesta á dañar á las demás, á ponerlas estorbos y suscitarlas disensiones intestinas, no hay duda que todas tendrían derecho de reunirse para reprimirla, para castigarla (1), y aun para ponerla para siempre en la imposibilidad de dañar. Tales serían los justos frutos de la política que alaba Maquiavelo en Cesar Borgia. La que seguía Felipe II, Rey de España, era absolutamente propia para reunir contra él la Europa entera, y con razón había formado Heinrique el Grande el designio de humillar una potencia formidable por sus fuerzas y perniciosas por sus máximas.

(1) Castigar es demasiado en este caso. Reprimir y poner en la imposibilidad de dañar, expresa todo lo necesario. Heinrique IV no era el superior de Felipe II, y por lo mismo no era para castigarle, sino para libertarse de las fuerzas y de las perniciosas máximas de este príncipe, para lo que había formado el designio de abatir su formidable poder. D.
das las reglas, cuando se erigieron en jueces del
Inca Athualpa; pues si este príncipe hubiera vio-
lado para con ellos el derecho de gentes, hu-
bieran tenido derecho para castigarle; pero le
acusaron de haber quitado la vida á algunos de
sus súbditos, y haber tenido muchas mugeres
etc., cosas de que no tenía que darles cuenta
alguna, y lo que puso colmo á su extravagante
injusticia fue que le condenaron por las leyes de
España (1).

§. lvi. Pero si el príncipe, atacando las leyes
fundamentales, da á su pueblo un motivo legítimo
de resistirle: si la tiranía insoportable sub-
bleva la nación, cualquiera potencia extranjera
tiene derecho para socorrer al pueblo oprimido
que le pide auxilio. La nación inglesa se quejaba
con justicia de Jacobo IIo, y los grandes y los
mejores patriotas, resueltos á contener los
atentados que se dirigian claramente á destruir
la Constitución, y á oprimir la libertad pública
y la religion, se proporcionaron los socorros
de las Provincias-Unidas. La autoridad del
príncipe de Orange influyó sin duda en las de-
liberaciones de los estados generales, pero no
los hizo cometer ninguna injusticia. Cuando un
pueblo toma con razón las armas contra su
opresor, es justicia y generosidad auxiliar á
los valientes que defienden su libertad. Por con-

(1) Garcilaso de la Vega.
siguiente, siempre que las cosas lleguen á términos de una guerra civil, las potencias extranjeras pueden ayudar al partido que les parezca fundado en justicia. La que favorece á un tirano aborrecido, ó se declara por un pueblo injusto y rebelde, peca sin duda contra su deber. Pero cuando los vínculos de la sociedad política se destruyen, ó á lo menos, se suspenden entre el soberano y su pueblo, se les puede considerar como dos potencias distintas; y puesto que una y otra son independientes de toda autoridad extranjera, ninguna tiene derecho para juzgarlas. Ambas pueden tener razón, y los que las ayudan pueden creer que sostienen la justa causa. Por consiguiente es preciso, en virtud del derecho de gentes voluntario (prelim. §. xxi), que los dos partidos puedan obrar como que tienen un derecho igual, y que se traten de este modo hasta la decisión.

Pero no se debe abusar de esta máxima para autorizar odiosas maniobras contra la tranquilidad de los estados; porque es violar el derecho de gentes, excitar á la rebelión los súbditos que obedecen actualmente á su soberano, aunque se quejen de su gobierno.

La práctica de las naciones es conforme a nuestras máximas. Cuando los protestantes de Alemania iban á socorrer á los reformados de Francia, la corte no los trató nunca de otro modo que como á enemigos formales, y segun
las leyes de la guerra. La Francia favorecía por aquel tiempo á los Países Bajos sublevados contra España, y no pretendía que se considerase á sus tropas en otro concepto que como auxiliares en una guerra en forma. Pero ninguna potencia deja de quejarse como de una injuria atroz, si alguna por medio de emisarios intenta excitar sus súbditos á la rebelión.

Por lo que hace á esos monstruos que, con el título de soberanos, llegan á ser la plaga y el horror de la humanidad, son animales feroces de los cuales puede cualquier hombre valiente purgar la tierra con justicia. Toda la antigüedad ha celebrado á Hércules porque libertó al mundo de un Anteo, de un Busiris y de un Diomedes.

§. LVII. Habiendo establecido que las naciones extranjeras no tienen ningún derecho para mezclarse en el gobierno de un estado independiente, no es difícil probar que este está autorizado para no sufrirlo, porque gobernarse á su gusto es el premio de la independencia. Un estado soberano no puede ser molestado en este punto, sino por algunos derechos particulares que él mismo haya concedido a otros en sus tratados; y que por la naturaleza misma de una materia tan envidiada como el gobierno, no puedan extenderse más allá de los términos claros y formales de los tratados. Fuera de este caso tiene derecho el soberano
para tratar como a enemigos a los que inten-
ten mezclarse en sus negocios domésticos de
otro modo que por sus buenos oficios.
§. LVIII. La religion es en todos sentidos un
objeto muy interesante para una nación, y una
de las materias mas importantes que pueden
ocupar al gobierno. Un pueblo independiente
solo a Dios tiene que dar cuenta en materia
de religion, porque posee el derecho de condu-
cirse en esto, como en cualquiera otra cosa,
según las luces de su conciencia, y de no per-
mitir que ninguno extranjero se mezcle en un
asunto tan delicado (1). El uso conservado
durante mucho tiempo en la cristiandad, de
juzgar y arreglar en un concilio general todos
los negocios de religion, no se introdujo, sino
por la circunstancia singular de la sumision
de la iglesia entera al mismo gobierno civil
del imperio Romano. Cuando la destruccion
del imperio produjo muchos reinos inde-
pendientes, se advirtió que este mismo uso
era contrario á los primeros elementos del

(1) Sin embargo, cuando hay un partido encarnizado con-
tra la religion que se profesa, y de sus resultados persigue un
principe inmediato á los súbditos de aquella religion, es
permitido socorrerlos, como dijo muy bien el rey de Ingla-
terra Jacob I, á Barillon, embajador de la regente de Francia,
Maria de Medicis: «cuando mis vecinos se ven atacados por
una querella que me pertenece, el derecho natural exige que
«evite el mal que me pueda resultar de ella.» Le Vassor,
Hist. de Luis XIV.
gobierno, y á la idea misma de estado y de sociedad política. Sin embargo, sostenido largo tiempo por la preocupación e ignorancia del clero, se respetaba todavía en la época de la reforma. Los estados que la habían abrazado, ofrecían someterse á las decisiones de un concilio imparcial y legítimamente reunido; pero en el día se atreverían á decir claramente que no dependen de ningún poder sobre la tierra, ni en materia de religión, ni de gobierno civil. La autoridad general y absoluta del papa y del concilio, es absurda en cualquiera otro sistema que el de los papas, que querían hacer un solo cuerpo de toda la cristianidad, de la que se llaman monarcas supremos (1). Aun los soberanos católicos han procurado también contener aquella autoridad en unos límites compatibles con su poder supremo, pues no reciben los decretos de los concilios y las bulas de los papas hasta después de haberlos mandado examinar; y estas leyes eclesiásticas no tienen fuerza en sus estados, sino por la admisión del príncipe. En el primer libro de esta obra (cap. xii.) hemos establecido suficientemente los derechos del estado en materia de religión, y sólo los recordamos ahora con el fin de sacar de ellos justas concluencias.

(1) Véase lib. 1, §. 146, y Bodin, De la República, lib. 1, cap. 9, con sus citas, pág. 159.
§. lix. Por consiguiente, es cierto que ninguno puede mezclarse contra la voluntad de una nación en sus negocios de religión, sin perjudicar sus derechos y hacerla injuria; y con menos razón es permitido emplear la fuerza de las armas para obligarla a recibir una doctrina y un culto que se miran como divinos. ¿Con qué derecho se erigen los hombres en defensores y protectores de la causa de Dios? El sabrá siempre que le agrade atraer los pueblos al verdadero conocimiento por medios más seguros que la violencia. Los perseguidores no hacen verdaderas conversiones, y la monstruosa máxima de extender la religión por medio de la espada, es un trastorno del derecho de gentes, y la plaga más terrible de las naciones; porque cualquier frenético creerá combatir por la causa de Dios, y el ambicioso se disfrazará con este pretexo. Al mismo tiempo que Cárlo Magno llevaba á sangre y fuego la Saxonia para plantar allí el cristianismo, los sucesores de Mahomet asolaban el Asia y el África para establecer en ellas el Alcorán.

§. lx. Pero es un oficio de humanidad procurar con medios suaves y legítimos persuadir á una nación para que reciba una religión que se tiene por única, verdadera y saludable. Pue-
den enviarla suyos que la instruyan como misioneros, y este cuidado es enteramente conforme a la atención que todos los pueblos deben poner en la perfección y felicidad de los demás; pero es preciso observar que para no ofender a los derechos del soberano, deben abstenerse los misioneros de predicar a sus pueblos una doctrina nueva, clandestinamente y sin permiso. Puede rehusar sus oficios, y si los despeide, deben obedecer. Es preciso tener una orden muy expresa del rey de los reyes para desobedecer legítimamente a un soberano que manda según la extensión de su autoridad, y el que no se convenza de esta orden extraordinaria de la divinidad, no hará mas que usar de sus derechos, castigando al misionero desobediente. Pero, si la nación o una parte considerable del pueblo quiere retener al misionero y seguir su doctrina, ya hemos establecido los derechos de la nacion y los de los ciudadanos (lib. 1º, §. 128 y 136); allí se hallarán razones con que responder á esta cuestión.

§. lxi. La materia es muy delicada, y no se puede autorizar el celo inconsiderado de hacer proselitos, sin poner en peligro la tranquilidad de todas las naciones, sin exponer también los misioneros á pecar contra su deber, al mismo tiempo que creen hacer la obra mas meritoria: porque en fin, es seguramente prestar
un mal oficio á una nacion y dañarla escencialmente, derramar en su seno una religion falsa y peligrosa. No hay nadie que no crea que solamente la suya es la verdadera y saludable. Si se recomienda y enciende en todos los corazones el celo ardiente de los misioneros, se verá inundarse la Europa de Lamas, Bonzos y Dervis; al mismo tiempo que los frailes de todas especies recorrerán el Asia y el Africa. Los ministros reformados irán á insultar la Inquisicion en España y en Italia, mientras los jesuitas se esparcirán entre los protestantes para volverlos al gremio de la iglesia. Acusen los católicos cuanto quieran la tibieza de los protestantes; pero la conducta de estos es seguramente mas conforme á la razon y al derecho de gentes. El verdadero celo se aplica á hacer florecer una religion santa en los paises en que se halla recibida, y en hacerla útil á las costumbres y al estado; y tiene harta ocupacion en su patria esperando las disposiciones de la Providencia, la invitacion de los pueblos extranjeros, ó una mision divina bien cierta para predicarla fuera. Añadamos en fin que, para emprender legítimamente el anunciar una religion á los diversos pueblos del mundo, es preciso estar primero seguros de su verdad por el examen mas serio. ¿Pero acaso dudarán los cristianos de su religion? Estemos siempre dispuestos á comunicar
nuestras luces: expóngamos desnudamente y con sinceridad los principios de nuestra creencia á los que deseen oírla; instruyamosles y persuádamosles con la evidencia; pero no procuremos arrastrarlos con el fuego del entusiasmo. Bastante tenemos que hacer con responder de nuestra propia conciencia. No se le niegue á ninguno la luz, y el celo turbulento no destruirá la paz de las naciones.

§. lxii. Cuando en un país se persigue una religión, las naciones extranjeras que la profesan pueden interceder por sus hermanos; pero esto es lo único que se les permite legítimamente, siempre que la persecución no llegue á excesos intolerables. Entonces está en el caso de la tiranía manifiesta, contra la cual es permitido á todas las naciones socorrer un pueblo desgraciado (§. livi). El interés de su seguridad puede también autorizarlas para defender á los perseguidos. Un rey de Francia respondió á los embajadores que solicitaban que dejase en paz sus súbditos reformados, que él era el amo en su reino. Pero los soberanos protestantes que veían una conjuración de todos los católicos encarnizados en su perdición, también eran dueños de socorrer á los que podían fortificar su partido, y ayudarlos á libertarse de la ruina que les amenazaba. No hay ya cuestión de distinción de estado y de nación, cuando se trata de remuirse contra los

frenéti que no

de la

§. la

sociada

Si no s á cada

latrocin

cion de

tecesar

cias más

poderos
dificil de

muestra

todos lo

ahora q

nos con

no estan

§. v), si
ellas por

§. lx

nes tiene

entre sí

pulidos
frenéticos que quieren exterminar á todos los que no reciben ciegamente su doctrina.

CAPÍTULO V.

DE LA OBSERVANCIA DE LA JUSTICIA ENTRE LAS NACIONES.

§. LXXXI. La justicia es la base de todas las sociedades y el vínculo seguro del comercio. Si no se respetase en ella esta virtud que da á cada uno lo suyo, la sociedad humana sería un latrocínio inmenso, en vez de una comunicación de socorros y de buenos oficios. Aun es más necesario entre las naciones que entre los particulares; porque la injusticia tiene consecuencias más terribles en las desavenencias de estos poderosos cuerpos políticos, y porque es más difícil tener razón. El derecho natural demuestra fácilmente la obligación que tienen todos los hombres de ser justos. Suponemos ahora que todos la conocen suficientemente, y nos contentaremos con observar que no solo no están exentas de ella las naciones (prelim., §. v.), sino que es mucho más sagrada para ellas por la importancia de sus consecuencias.

§. LXXXIV. Por consiguiente, todas las naciones tienen una obligación estrecha de cultivar entre sí la justicia, de observarla con escrupulosidad, y de abstenerse de todo lo que
pueda perjudicarla. Todas deben dar á las demás lo que las pertenece, respetar sus derechos y dejarlas que los posean pacíficamente (1).

§. lxv. De esta obligación indispensable que impone la naturaleza á las naciones, y de las que tiene cada una con respecto á sí misma, resulta que todos los estados tienen derecho para no sufrir que les quiten ninguno de los que poseen, ni ninguna cosa de las que les pertenecen legítimamente, porque opiniándose á ello, obran únicamente conforme á sus deberes, y en esto consiste el derecho (§. xliv).

§. lxvi. Este derecho es perfecto; quiero decir, que está acompañado del de usar de la fuerza para darle valor. En vano nos hubiera concedido la naturaleza el derecho de no sufrir la injusticia, y en vano obligaría á los de-

(1) ¿No pudiera extenderse este deber á la ejecución de las sentencias dadas en otro país según las formas acostumbradas y necesarias? He aquí lo que con este motivo escribía Mr San Beuningten á Mr de Witt, el 16 de octubre de 1666: «Por el decreto que ha dado la corte de Holanda en la causa de un tal « Koningh de Rotterdam, advierto que supone que todas las sentencias dadas por los parlamentos de Francia contra los habitantes de Holanda in judicio contradictorio, deben ejecutarse por las requisitorias de aquellos parlamentos. Pero ignoro si los tribunales de aquel país hacen lo mismo con las sentencias dadas en Holanda; y en el caso contrario se puede convencer en que las sentencias de una y otra parte contra los suabditos de ambos estados no sufrirán efecto, sino en los bienes y muebles pertenecientes al condenado en el estado en donde se ha dado la sentencia.»
mas a que fuesen justos con nosostros, si no pudiesemos usar legítimamente de la fuerza cuando se niegan a cumplir este deber. El justo viviría á merced de la avaricia y de la injusticia, y muy pronto serían inútiles para él todos sus derechos.

§. lxvii. De aquí nacen, como otras tantas ramas: primero, el derecho de una justa defensa que pertenece á cualquiera nación; ó el derecho de oponer la fuerza al que ataque sus derechos. Este es el fundamento de la guerra defensiva.

§. lxviii. Segundo, el derecho de hacerse administrar justicia por la fuerza, si no puede conseguirla de otro modo, ó de defender su derecho á mano armada. Este es el fundamento de la guerra ofensiva.

§. lxix. La injusticia hecha á sabiendas es sin duda una especie de lesion; y por consiguiente hay derecho para castigarla como hemos manifestado mas arriba hablando de la lesion en general (§. lxx). El derecho de no sufrir la injusticia es un ramo del derecho de seguridad (1).

(1) No podemos castigar la injusticia cometida, porque no podemos hacer que lo que se ha ejecutado deje de estarlo. Pero podemos castigar, es decir, tratar de corregir ó inclinar al bien, por medios eicaces, la mala voluntad del agente injusto que está bajo de nuestro dominio. Tenemos derecho de no sufrir la injusticia que se nos quiera hacer, que es el fundamento de la guerra defensiva: si se nos ha hecho alguna, de-
§. LXX. Aplicaremos ahora á las naciones injustas lo que hemos dicho antes (§. LIII) de una nación dañina. Si hubiese alguna que hollase abiertamente la justicia, menospreciando y violando los derechos de las demás, siempre que tuviera ocasión; el interés de la sociedad humana autorizaría á todas las demás á reunirse para reprimirla y castigarla. No olvidemos ahora la máxima establecida en nuestros preliminares, de que no pertenece á las naciones erigirse en jueces unas de otras. En los casos particulares y susceptibles de menor duda, se debe suponer que cada una de las partes tiene algún derecho; y la injusticia de la que se equivoca, puede hacer de su error y no de un menosprecio general de la justicia. Pero si, por algunas máximas constantes y una conducta sostenida, manifiesta evidentemente una nación esta disposición perniciosa, y no respeta ningún derecho, la conservación del género humano exige que se la reprima (1). La que forma

hemos sufrir que lo que se ha ejecutado, lo esté, pero tenemos derecho para exigir por fuerza la reparación que es el fundamento de la guerra ofensiva. Además de la reparación tenemos también el derecho, no de vengarnos; es decir, de hacer daño al enemigo por solo placer nuestro, sino de proveer á nuestra seguridad quitándole los medios de dañarnos en lo sucesivo. Esto puede llegar hasta el caso de apoderarnos de él, y entonces únicamente principia el derecho ó el deber de castigarle lo que sea necesario. Véanse las notas precedentes del editor sobre esta materia. D.

(1) No basta reprimir: es preciso matar á semejante pue-
y defiende una pretension injusta, agravia únicamente á aquella á quien interesa la pretension: pero la que se burla generalmente de la justicia, ofende á todas la naciones.

CAPÍTULO VI.

DE LA PARTE QUE PUEDE TENER LA NACIÓN EN LAS ACCIONES DE SUS CIUDADANOS.

§. lxxi. En los capítulos anteriores hemos manifestado los deberes comunes de las naciones unas con otras, cómo deben respetarse mutuamente y abstenerse de cualquier injuria y ofensa, y cómo deben reinar la justicia y la equidad en toda su conducta. Pero no hemos considerado hasta ahora sino las acciones del cuerpo mismo de la nación, del estado; ó del soberano. Los particulares, miembros de una nación, pueden ofender y maltratar á los ciudadanos de otra, y hacer injuria á un soberano extranjero. Nos queda que examinar la

blo. Pero entendamosnos. Matar á un hombre, es perderle sin corregirle, ni reparar el mal que ha hecho. Pero puede matarse á un pueblo después de haberle vencido, sin matar á ningun individuo: porque solo se mata á una persona moral, ó á un nombre colectivo, haciendo que déjen aquellas gentes de ser un pueblo, quitándoles su autonomía, sometiéndolos, y reduciendo sí es necesario á la esclavitud á los individuos que se manifiesten indóctiles. Tales son los pueblos piratas de Berbería, cuya existencia como cuerpos políticos hace ya demasiado tiempo que sufre la Europa. D.
parte que puede tomar el estado en las acciones de los ciudadanos, y cuales son en este punto los derechos y obligaciones de los soberanos.

Cualquiera que ofende al estado, que perjudica sus derechos, turba su tranquilidad, o le hace injuria de cualquier modo que sea; se declara enemigo suyo y se pone en el caso de que le castiguen justamente. Cualquiera que maltrata a un ciudadano, ofende indirectamente al estado que debe protegerlo. El soberano de este debe (1) vengar su injuria, y si es posible obligar al agresor a una reparacion completa, o castigarle, puesto que de otro modo no lograria el ciudadano la seguridad, que es el grande objeto de la asociacion civil.

§. lxxi. Pero, por otra parte, la nacion ó el soberano no debe permitir que los ciudadanos hagan injuria á los suyos de otro estado, y mucho menos todavía que ofendan á este; no solamente porque ningun soberano debe permitir que los que estan bajo de sus órdenes, quebranten los preceptos de la ley natural, que prohíbe toda especie de injuria, sino tambien porque debeo respetarse las naciones mutuamente; abstenerse de cualquiera ofensa, lesion e injuria, en una palabra, de todo lo

que pue deran, en las re mite qu en su ca tanto át mo. Fin estado y atencion contiene extrange en vez ó blecido l verá un.

§. lxxv que el est mas vigi todas las tenga si seria inju todas las siguiente se ha re se haya:

§. lxxi y ratifica asunto p tonces á la injuria ha sido n

(1) Si fuera mio esta obra borraría este término. Véanse mis notas anteriores sobre la verdadera nación de castigar. El soberano de semejante ofensor debe obrar con él, como si le hubiera ofendido á el mismo ó á uno de sus suyos. D.
que pueda perjudicar á las demas. Si un soberano, que puede contener á sus súbditos en las reglas de la justicia y de la paz, permite que maltraten á una nacion extrangera en su cuerpo, ó en sus miembros, la agravia tanto á toda ella, como si la maltratase él mismo. Finalmente, la conservacion misma del estado y de la sociedad humana exigen esta atencion de todos los soberanos. Si alguno no contiene á sus súbditos contra las naciones extrangeras, harán estas lo mismo con él; y en vez de la sociedad fraternal que ha establecido la naturaleza entre los hombres, solo se verá un horrible latrocinio de nacion á nacion.

§. lxxxiii. Sin embargo, como es imposible que el estado mejor organizado, ó el soberano mas vigilante y absoluto, modere á su gusto todas las acciones de sus súbditos, y los mantenga siempre en la mas exacta obediencia, seria injusto imputar á la nacion ó al soberano todas las faltas de los ciudadanos. Por consiguiente, no se puede decir en general que se ha recibido injuria de una nacion, porque se haya recibido de uno de sus miembros.

§. lxxxiv. Pero si la nacion, ó su gese, aprueba y ratifica la accion del ciudadano, la hace ya asunto propio; y el ofendido debe mirar entonces á la nacion como al verdadero autor de la injuria, de la cual tal vez el ciudadano no ha sido mas que el instrumento.
§. LXXV. Si el estado ofendido tiene en su poder al culpable, puede sin dificultad hacerse justicia y castigarle; pero si ha huido y vuelto a su patria, debe pedirlo a su soberano.

§. LXXVI. Y puesto que éste no debe permitir que sus súbditos molesten a los de otro, o les hagan injuria, y mucho menos que ofendan audazmente a las potencias extranjeras, debe obligar al culpable a que repara el perjuicio o la injuria, si es posible, o castigarle ejemplarmente, o en fin, según el caso y las circunstancias, entregarle al estado ofendido para que haga justicia. Esto es lo que se observa generalmente con respecto a los grandes crímenes, que son al mismo tiempo contrarios a las leyes de seguridad de todas las naciones. Los asesinos, los incendiarios y los ladrones, se prenden en todas partes á petición del soberano en cuyo territorio han cometido el crimen, y se entregan á su justicia. En los estados que tienen conexiones mas estrechas de amistad y buena vecindad se hace mas todavía, pues aun en los casos de delitos comunes que se siguen civilmente, sea para reparacion del perjuicio, o para una pena ligera y civil, los súbditos de dos estados vecinos están obligados recíprocamente a comparecer ante el magistrado del lugar en donde son acusados. En virtud de una petición de aquel magistrado, que se llama exorte, quedan citados judicialmente,
y su propio juez los obliga á comparecer; Institución admirable, que se observa con vigor en toda la Suiza, por la cual viven reunidos en paz muchos estados vecinos, y parece que no forman sino una misma república! Luego que llegan los exhortos en forma, el superior del acusado debe ponerlos en ejecución. A él no le pertenece examinar si es verdadera ó falsa la acusación, porque debe hacer buen juicio de la justicia de su vecino; y no destruir por su desconfianza una institución tan á propósito para conservar la buena armonía. Sin embargo, si una experiencia constante le mostrase que sus súbditos son vejados por los magistrados vecinos, que los citan ante su tribunal, tiene sin duda permiso para cuidar de la protección que debe á su pueblo, y no aceptar los exhortos hasta que le hayan dado razón de los abusos, y se hayan corregido. Pero á él le tocaría alegar sus razones y publicarlas.

§. lxxvii. El soberano que se niega á obligar á su súbdito á que repare el perjuicio causado, ó á castigar al culpable, ó finalmente á entregarle, se hace en algún modo cómplice de la injuria y es responsable de ella. Pero si entrega los bienes del culpable en resarcimiento, en los casos susceptibles de esta reparación; ó la persona para que sufra la pena de su crimen, el ofendido nada tiene ya que pedirle. Habiendo entregado el rey Demetrio á los Romanos los
que habían matado a su embajador, el senado se los devolvió, queriendo reservarse la libertad de castigar, cuando llegase la ocasión, un atentado semejante, vengándole en el mismo rey ó en sus estados (1). Si la cosa era así y el rey no tenía parte alguna en el asesinato del embajador romano, la conducta del senado era muy injusta, y digna de los hombres que solo buscan un pretexto para sus empresas ambiciosas.

§. LXXVIII. Finalmente hay otro caso en que la nación es culpable en general de los atentados de sus miembros; y es cuando por sus costumbres y máximas de gobierno habitúa y autoriza á los ciudadanos á despojar y maltratar indiferentemente á los extranjeros, á hacer correrías en los países vecinos etc.; y por eso la nación de los Usbecks es culpable de todos los latrocinios de los individuos que la componen. Los príncipes á cuyos súbditos roban y matan, y cuyo territorio está infestado de aquellos bandidos, pueden quejarse de ellos justamente a la nación entera; y todas las demás tienen derecho para coligarse contra ella, reprimirla y tratarla como a enemiga común del género humano. Las naciones cristianas tendrían el mismo fundamento para reunirse contra las

(1) Véase á Polibio, citado por Barbeyrac, en sus notas á Grcio, lib. 5, cap. 24, §. 7.